

**ANT.** : Solicitud de acceso a información pública.

**MAT.** : Responde solicitud de información  
N° AX001W-0000454, de fecha 1 de  
diciembre de 2014.

**SANTIAGO,**

**A : SR. JOSÉ OGAZ ESPINOZA**

**DE : PRESIDENTE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO**

Por la solicitud de la materia, Ud. ha pedido textualmente lo siguiente: "Conforme da cuenta la subsecretaría del interior, Uds. pidieron información relacionada con el Cuerpo de Bomberos de Calera de Tango, en relación a transferencias y rendiciones de dineros de origen público. También informan que tales documentos fueron solicitados para estimar una demanda, querrela o denuncia sobre estos dineros, en contra de la institución o su representante legal. Vvengo en solicitar a Uds. me sea informado si han incoado acciones legales sobre esta materia (aparte de la demanda de cancelación de P.J. ya sabida) en contra del cuerpos dicho o su representante legal, a la presente fecha. En la negativa, indicar las razones y circunstancias que motivaron la consulta y la tentativa de ejercer acciones legales, motivo por el cual pidieron antecedentes a la Subsecretaria dicha y que auotridad encomienda tales posibles acciones. Agradeceré copia digital de la solicitud de Uds. a la subsecreatría del interior y de la respuesta de esta última, mediante oficio N° 7771 de abril 2014, con documentos adjuntos".

Al respecto, informo a Ud. que se llevó a cabo una investigación relacionada con la materia por usted consultada por parte de la Fiscalía Local de San Bernardo, bajo el RUC N° 1310030221-1. De momento, el Consejo no ha incoado acciones legales, sin perjuicio de ejercerlas en el futuro en uso de sus atribuciones legales.

Cabe señalar, en lo que respecta a su requerimiento de indicar las razones y circunstancias que motivaron el requerir información a la Subsecretaría del Interior y la tentativa de ejercer acciones legales y qué autoridad encomienda tales posibles acciones, comunico a usted que este Consejo es un organismo autónomo del Estado, cuya función principal es representar judicialmente los intereses del Estado y/o Fisco de Chile y adopta sus decisiones a través de un cuerpo colegiado, que es el Consejo pleno, y a través de sus distintas secciones o comités formados por los mismos Consejeros. Las razones o circunstancias de las decisiones adoptadas tanto por el Consejo pleno como por sus secciones o comités corresponden al ámbito deliberativo que constituye la parte más esencial y reservada del trabajo que como abogados de este organismo ejercen los Consejeros, y, por tal razón, no pueden ser informados a usted pues están cubiertos por el secreto profesional del abogado, y, en consecuencia, amparados por la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285, según se explicará más adelante.

Respecto a su petición de tener copia digital de los documentos remitidos entre este Servicio y la Subsecretaría del Interior, informo a usted que, no es posible para este Servicio hacer entrega de la información solicitada, ya que, se trata de información reservada en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley 20.285, que señala: "Cuando se trata de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política de la República".

En efecto, lo que usted pide son antecedentes propios del cumplimiento de las tareas que la ley encomienda al Consejo de Defensa del Estado, por lo que dicha reserva se encuentra amparada por el secreto profesional del abogado.

El secreto profesional, además de su consagración en diversos cuerpos legales, como el Código Penal, Código Procesal Penal y Código de Procedimiento Civil, emana de la garantía constitucional del derecho a la defensa, consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho de toda persona a tener una defensa jurídica en la forma que la ley señala y sin que "ninguna autoridad o individuo pueda impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida".

Tanto para la doctrina como para la jurisprudencia, el derecho a defensa jurídica o "defensa técnica" que esta norma constitucional consagra, incluye, como una de sus expresiones fundamentales, el secreto profesional del abogado. Sólo a través del secreto profesional se brinda adecuada protección a las comunicaciones entre el abogado y su cliente, de modo que cualquier acto u omisión que lo vulnere o amenace debe ser entendido como un impedimento, restricción o perturbación a la intervención del letrado y, por ende, a la garantía misma.

En consonancia con esta idea, el Código de Ética del Colegio de abogados previene en su artículo 46: "Deberes que comprende el deber de confidencialidad. El deber de confidencialidad comprende: a) Prohibición de revelación. El abogado debe abstenerse de revelar la información cubierta por su deber de confidencialidad, así como de entregar, exhibir o facilitar el acceso a los soportes materiales, electrónicos o de cualquier otro tipo que contengan dicha información y que se encuentran bajo su custodia; b) Deberes de cuidado. El abogado debe adoptar medidas razonables para que las condiciones en las que recibe, obtiene, mantiene o revela información sujeta a deber de confidencialidad sean tales que cautelen el carácter confidencial de esa información; y c) Deber de cuidado respecto de acciones de colaboradores. El abogado debe adoptar medidas razonables para que la confidencialidad debida al cliente sea mantenida por quienes colaboran con él".

De la norma del Código de Ética se desprende que el secreto profesional es tanto un deber como un derecho. Esta última dimensión parece ser la más evidente, desde que la Constitución lo regula como una garantía a la que debe protección. Pero para hacer efectiva esa protección se hace imprescindible que el ordenamiento jurídico contemple mecanismos que hagan del respeto a la garantía un imperativo cuya infracción conlleve la imposición de sanciones. Esa dimensión imperativa o deber de respeto hacia el secreto profesional es la que consagra el artículo 231 del Código Penal, que sanciona al abogado que lo infrinja y que se hace especialmente aplicable a los funcionarios públicos en el artículo 247 del mismo Código.

En lo que respecta a los profesionales del Consejo de Defensa del Estado, lo anterior se ve expresamente ratificado por la propia Ley Orgánica de este Servicio. En efecto, el artículo 61 del D.F.L N° 1, de 1993, del

Ministerio de Hacienda, prescribe que: "Los profesionales y funcionarios que se desempeñen en el Consejo, cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio, siéndole aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal".

De acuerdo a esta norma, los funcionarios y profesionales de este Servicio se encuentran obligados por ley a mantener reserva de los antecedentes de que conozcan en el desempeño de sus funciones, respecto de los casos en que éste intervenga, bajo las sanciones penales que protegen el secreto profesional.

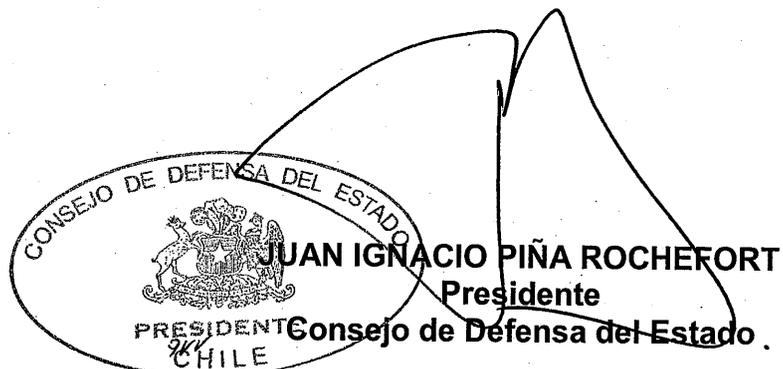
La aplicación de esta obligación legal en relación a su requerimiento resulta evidente, especialmente cuando lo solicitado consiste, precisamente, en datos o información solicitada y/o recibida en el desarrollo de la gestión profesional desplegada por los abogados del Consejo de Defensa del Estado en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el haber asumido esta representación, de modo que la divulgación de la información por Ud. requerida, no sólo se encuentra vedada por la propia ley, sino que es sancionada, además, como constitutiva de delito por la Ley Orgánica de este Servicio, circunstancias que se mantienen vigentes más allá del término del proceso judicial correspondiente, dado que a ello obliga precisamente el secreto profesional, como se ha explicado.

Conforme a lo expuesto, cabe hacer presente a usted que la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 28 de noviembre del año 2012, resolvió una serie de recursos de queja en la disputa legal sostenida entre el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo para la Transparencia y determinó que los antecedentes que maneja este Servicio están cubiertos por el secreto profesional de los abogados negándose su acceso público.

La sentencia recayó en los roles 2423-2012, 2582-2012 y 2788-2012, todos de la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los señores ministros Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Emilio Pfeffer, y resolvió tres recursos de queja en contra de distintas salas de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que analizaron sendas peticiones de acceso a los antecedentes que manejaba este Servicio para representar al Estado en distintos litigios, estableciendo que los

antecedentes que son entregados al Consejo de Defensa del Estado para representar los intereses de los distintos organismos fiscales se encuentran cubiertos por el secreto profesional de los abogados y, por lo tanto, se debe negar su acceso público y mantenerse en reserva.

Saluda atentamente a Ud.,



ISR/rso

Distribución:

1. Destinatario
2. Archivo Presidencia
3. Archivo Defensa Estatal
4. Oficina de Partes